

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA
ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA

Medellín, primero de septiembre de dos mil veintitrés.

Radicación n°.	05001 22 03 000 2023 00381 00
Proceso	Conflicto - Ejecutivo
Demandante	Bancolombia S.A.
Demandado	Luis Alberto Aparicio Pacheco
Procedencia	Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Medellín y Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí
Decisión	Dirime conflicto, Asigna competencia al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Medellín
Tema	Factores de competencia. Domicilio
Rdo. interno	075-23
Interlocutorio No.	158-23

Procede el Despacho a pronunciarse con relación al conflicto negativo de competencia suscitado entre el JUZGADO VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN y el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, respecto del proceso ejecutivo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

Presentó BANCOLOMBIA S.A. solicitud de aprehensión y posterior entrega del vehículo de placas KHJ486, de propiedad del deudor LUIS ALBERTO APARICIO PACHECO, sobre el cual éste había constituido garantía prendaria a favor de aquélla, dirigida al JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN (REPARTO) –Archivo 02-.

Dicho trámite le fue repartido al JUZGADO VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN quien, mediante auto del 13 de abril de 2023, rechazó la aludida petición, considerando que carecía de competencia, en razón de que en *el acápite*

de competencia, se advierte que el vehículo objeto de garantía mobiliaria circula principalmente en el municipio de Itagüí– Antioquia, lugar que además es reportado como el del domicilio del deudora”, por lo que de conformidad con lo establecido en artículo 28.14 del C. G. del P., estimó que era competente el juez del lugar donde debía practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, en este caso, los Juzgados Civiles Municipales de Oralidad de Itagüí (Reparto), y en consecuencia, ordenó la remisión del presente asunto a estos entes judiciales (Archivo 03).

En cumplimiento de lo anterior, le fue asignado el asunto referenciado al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, quien mediante auto del 9 de agosto del año que transcurre, se rehusó a avocar el conocimiento del mismo, aduciendo su falta de competencia en razón de que la parte demandante había manifestado desconocer el paradero del rodante objeto de aprehensión, y que dado que el mismo podía circular en todo el territorio nacional, había escogido de manera libre y voluntaria, la jurisdicción del municipio de Medellín, en atención a lo contemplado en el numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso, que era la norma aplicable a estos casos, conforme lo había señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Archivo 08).

Con fundamento en lo anterior, propuso el conflicto negativo de competencia y dispuso remitir el expediente a esta Corporación para que fuera dirimido el mismo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia para dirimir el conflicto. Este Despacho es competente para conocer y decidir del presente conflicto por ser el superior funcional de los dos juzgados en conflicto, conforme lo establecido en el precepto 139 del Código General del Proceso, ya que conocen asuntos en materia civil, de igual categoría, esto es, municipal y pertenecientes al distrito judicial de Medellín, por estar localizados uno en Medellín y otro en Itagüí.

2.2. Factores de competencia. Es la forma como se distribuye el conocimiento de los diferentes procesos en los distintos órganos judiciales de una misma especialidad, para lo cual se tienen en cuenta los factores *subjetivo*, que alude a la calidad de las partes; el *objetivo*, que se refiere a la naturaleza del asunto y su cuantía; el *territorial*, que hace referencia al domicilio, lugar de ubicación de los

bienes objeto de la demanda, entre otros; el de *conexión*, en razón del cual se permite acumular pretensiones que son competencia de diferentes jueces, en los casos que expresamente lo contemple la ley; y el *funcional*, que tiene en consideración la categoría y jerarquía de los funcionarios, para que se cumpla con la doble instancia.

El artículo 28 del Estatuto Procesal Civil establece una serie de reglas que dan lugar a los llamados foros o fueros que determinan el sitio (competencia territorial), donde puede el ciudadano demandar o ser demandado y obtener el reconocimiento y la declaración judicial de sus derechos o la ejecución de los mismos; los aludidos foros, por expresa disposición legal y en atención a las circunstancias propias, operan de **manera privativa**, en caso de que se imponga repeliendo cualquier otro, o **concurrente**, cuando, por el contrario, coinciden con otro u otros sucesivamente, es decir uno a falta de otro, o por elección si se autoriza al actor para elegir entre varias opciones que la ley señala.

3. CASO CONCRETO.

Establece el artículo 28 del Código General del Proceso, como se indicó con antelación, las pautas para establecer la competencia por dicho factor, previendo como regla general su determinación por el fuero personal, esto es, que “...*salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado*”; no obstante, en el numeral 7º de la misma preceptiva, se contempla una excepción a dicha regla, para los casos en los que se ejerciten derechos reales, será competente, de modo privativo, **el juez del lugar donde estén ubicados los bienes** y que, de encontrarse en diferentes circunscripciones territoriales, lo será el de cualquiera de ellas, **a elección del demandante**, norma aplicable al caso concreto, conforme con lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia¹:

“...es necesario mencionar que si bien en el pasado la Corte aplicó el numeral 14 del artículo 28 del Código General del Proceso para resolver conflictos de competencia atinentes a diligencias de “aprehensión y entrega” 5, un replanteamiento del tema ha llevado a cambiar ese criterio,

¹ Citada en auto AC1979 del 26 de mayo de 2021. Radicación 11001-02-03-000-2021-00556-00. Ver también AC2218-2019, del 10 de junio de 2019 y AC008-21 de enero 18 de 2021. Radicación 11001-02-03-000-2020-03528-00.

para en definitiva entender que en esa clase de peticiones propias de la modalidad de pago directo prevista en el artículo 60 de la Ley de garantías Mobiliarias, ciertamente se está haciendo ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su crédito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro está, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual carece de tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial, que de manera más cercana encaja en el caso, es la del numeral séptimo del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de economía procesal e inmediación, habida cuenta que al juez a quien mejor y más fácil le queda disponer lo necesario para la “aprehensión y entrega” es, sin duda, al del sitio en el que esté el bien objeto de la diligencia”.

Clarificado que esta es la regla aplicable al caso concreto, resulta preciso entonces establecer si los supuestos aducidos en el libelo genitor, encajan en los considerandos expuestos por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre la competencia de estos asuntos, para estimar que para el *sub judice*, resultaba procedente que la demandante pudiera optar por formular este trámite en cualquier lugar del territorio nacional.

Del estudio de la jurisprudencia emitida por la citada Corporación en asuntos semejantes, pudo evidenciar este despacho que efectivamente en determinados asuntos de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria, ha definido la posibilidad del demandante de optar por presentar dicha solicitud en cualquier sede de la circunscripción nacional; sin embargo, ha señalado que no basta con la afirmación de que el vehículo puede circular en todo el territorio nacional para de manera indefectible conferir a la demandante dicha atribución, sino que en cada caso en concreto, además, se ha apoyado en las condiciones establecidas en el contrato con relación a la ubicación del bien dado en garantía, y/o en cualquier otro documento que acredite el lugar donde posiblemente se encuentra rodando el vehículo.

Es así como en el auto AC516-2022 del 21 de febrero de 2022², expuso:

“4. Para el caso concreto, nótese que en el libelo introductorio la parte

² Sala de Casación Civil. M.P. MARTHA CECILIA GUZMÁN ÁLVAREZ. Radicación n.º 11001-02-03-000-2022-00348-00.

demandante manifestó que «desconoce el lugar exacto donde el Deudor y/o Garante tiene el bien mueble pignorado», por lo que, en su sentir, quedó habilitado para interponer la solicitud en cualquier parte del territorio, teniendo en cuenta que el automotor puede ser ubicado en cualquier lugar de la nación.

*Sin embargo, **dicha aseveración no es suficiente para establecer la competencia por el fuero real**, por lo genérico de su expresión y por estar desprovista de un sustento probatorio mínimo.*

*En estos casos, **se debe contrastar con los datos militantes en el expediente**, de acuerdo con los cuales, se puede deducir por lo menos de momento, que el vehículo materia de la garantía real está en el municipio de El Santuario (Antioquia), pues el contrato de prenda abierta sin tenencia, aporta un elemento para determinar que la competencia (privativa) es de la agencia judicial de ese municipio.*

Sobre el particular, nótese que en el literal f) de la cláusula sexta, se prevé que es obligación del garante “notificar a EL ACREEDOR GARANTIZADO cualquier cambio de residencia y oficina y de ubicación de vehículo”, sin que se observe en los anexos ningún documento en el que conste alguna manifestación en tal sentido, lo que lleva a colegir que Walther Arbey Gallo Zuluaga aún habita en ese municipio y por contera, que allí permanece el bien; por lo tanto, la competencia corresponde, privativamente, al juez de El Santuario.” (Resalto intencional).

En este sentido, contrario a lo indicado por el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN, en el auto que se rehusó avocar el conocimiento del presente asunto, la parte demandante no indicó que el vehículo circulara en Itagüí, sino que:

“10. Si bien se pactó en el contrato de prenda sin tenencia que el rodante preñado debía permanecer en el domicilio del Deudor y/o Garante, también es cierto que en tratándose de un vehículo automotor con licencia para circular en todo el territorio nacional (Anexo #8) el Accionante desconoce su localización exacta del mismo; razón por demás suficiente, para que, siguiendo la reiterada jurisprudencia de la H. Corte Suprema de

Justicia, al resolver conflictos de competencia en asuntos similares al que nos ocupa, se le otorgue tal potestad a los jueces civiles municipales de cualquier localidad de Colombia incluido, por supuesto, los de la ciudad Bogotá.”

Sin embargo, se advierte que se trata de un párrafo introducido de otro asunto, o tomado como “formato” o “guía”, pues en este caso, no se pactó en el contrato de prenda adunado a la demanda que el vehículo debía permanecer en el domicilio del deudor y/o garante, como se indica en el mismo y se hace referencia a los jueces civiles de Bogotá, cuando la demanda fue dirigida a los de Medellín.

Ahora examinado el contrato de prenda sin tenencia con fundamento en el cual se invoca la aprehensión y posterior entrega del vehículo propiedad del demandado, puede advertirse que la única referencia que se hace sobre la ubicación de dicho bien o circulación, está en el ítem 8° del numeral 6° donde se relacionan “¿Cuáles son las obligaciones del Garante y del Deudor”, que *ad literam* indica:

“El garante debe mantener el vehículo dentro de la República de Colombia.”

Por tanto, considerando que no existe dentro del contrato un acuerdo con relación a un lugar específico dentro del territorio nacional en el que debía circular el vehículo automotor debe indicarse que en el presente caso, y ante la afirmación realizada por el demandante sobre el desconocimiento del lugar de circulación de dicho bien, era factible que optara por el juez ante el cual invocaría su pretensión, con fundamento en lo establecido en el numeral 7° del precepto 28 del Código General del Proceso, que lo faculta para tal efecto.

CONCLUSIÓN

Corolario de lo expuesto, la competencia para conocer de la solicitud de aprehensión y entrega de la garantía mobiliaria recae en el JUZGADO VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN, por ser éste el elegido por la parte demandante, entre las diferentes circunscripciones territoriales competentes, de acuerdo con las condiciones del contrato, sin que exista prueba de su variación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,

RESUELVE:

PRIMERO. SE DECLARA COMPETENTE al JUZGADO VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN, para conocer de la solicitud de aprehensión y posterior entrega de garantía mobiliaria, formulada por BANCOLOMBIA S.A., en contra del señor LUIS ALBERTO APARICIO PACHECO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SE ORDENA a la Secretaría que remita el presente asunto al citado despacho judicial, e informe lo acá decido al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.



ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022